

**UNIVERSIDAD MILITAR
NUEVA GRANADA**



**CONSTRUCCIÓN DE ESTADO; CONSOLIDACION ESTATAL, MONOPOLIO DE LA
FUERZA- COLOMBIA AÑOS NOVENTA**

**:
CAROL VIVIANA PARRA TRASLAVIÑA**

**Trabajo de grado presentado como requisito para optar por el título de
Profesional en Relaciones Internacionales y Estudios Políticos**

Director: Beatriz Tiusabá Gómez

**UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA
FACULTAD DE RELACIONES INTERNACIONALES, ESTRATEGIA Y SEGURIDAD
PROGRAMA DE RELACIONES INTERNACIONALES Y ESTUDIOS POLÍTICOS
BOGOTÁ D.C.
2012**

**CONSTRUCCIÓN DE ESTADO; CONSOLIDACION ESTATAL, MONOPOLIO DE LA
FUERZA- COLOMBIA AÑOS NOVENTA**

CAROL VIVIANA PARRA TRASLAVIÑA

**UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA
FACULTAD DE RELACIONES INTERNACIONALES, ESTRATEGIA Y SEGURIDAD
PROGRAMA DE RELACIONES INTERNACIONALES Y ESTUDIOS POLÍTICOS
BOGOTÁ D.C.
OCTUBRE DE 2012**

**CONSTRUCCIÓN DE ESTADO; CONSOLIDACION ESTATAL, MONOPOLIO DE LA
FUERZA- COLOMBIA AÑOS NOVENTA**

CAROL VIVIANA PARRA TRASLAVIÑA

**Trabajo de grado presentado como requisito para optar por el título de
Profesional en Relaciones Internacionales y Estudios Políticos**

Director: Beatriz Tiusabá Gómez

**UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA
FACULTAD DE RELACIONES INTERNACIONALES, ESTRATEGIA Y SEGURIDAD
PROGRAMA DE RELACIONES INTERNACIONALES Y ESTUDIOS POLÍTICOS
BOGOTÁ D.C.
OCTUBRE DE 2012**

CONTENIDO

	Pág.
1. INTRODUCCIÓN	1
2. CAPÍTULO I	
Proceso para la construcción y consolidación del Estado.	
2.1 Max Weber: Fundamentos teóricos a la construcción de estado.	5
2.2 Elementos constitutivos del Estado: Territorio, Población y Soberanía.	7
2.3 Sociedad	9
2.3.1 Nación	10
2.3.2 Cultura Política	11
2.4 Fines del Estado: Economía, Seguridad y Bienestar.	12
2.5 Estructura Institucional	
2.5.1 Partidos políticos	14
2.5.2 Estado de derecho	16
3. CAPÍTULO II	21
Procesos de construcción de Estado, contribución a la consolidación estatal.	
4. CAPÍTULO III	
4.1 Colombia década de los 90s	31
5. CONCLUSIONES	41
6. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	44

INTRODUCCIÓN

Al observar la problemática de seguridad que por décadas ha sumido al país en un permanente conflicto armado; consecuencia de una profunda crisis política y social, que ha conllevado a la lucha constante entre los grupos insurgentes y el Estado. Se puede evidenciar, la debilidad de las instituciones estatales, al igual que la falta de mecanismos eficientes que sirvan de solución definitiva para ésta problemática.

En consecuencia, el Estado colombiano a través de mecanismos y estrategias implementados en cada una de las administraciones que ha tenido el país, han sido la herramienta en búsqueda de la manera para combatir éste flagelo que ha sido la principal causa de un desarrollo lento, no sólo de tipo social sino económico. Por tal razón, el discurso de ésta lucha y la búsqueda continúa de la paz ha sido primordial para el sector rural, que ha sido el más afectado del país, puesto que, en consecuencia al conflicto el aumento del fenómeno del desplazamiento, los cultivos ilícitos, las masacres, y la falta de políticas eficientes que protejan y garanticen al sector agricultor la seguridad de su actividad.

En consecuencia del conflicto, Colombia ha tenido un crecimiento económico lento en comparación a los demás países de América Latina; como lo plantean varios autores, es resultado del conflicto armado interno, pues el Estado no detenta del monopolio de la fuerza, generando incertidumbre en los empresarios que si bien conocen la prosperidad del país, temen que sus inversiones se vean afectadas por éste.

Es así como, la búsqueda de la legitimidad se ha estructurado por medio de la consolidación de la seguridad y la detención del monopolio de la fuerza. Por lo tanto éste resulta ser un proceso importante para la construcción del Estado

colombiano, puesto que la falta de éste ha sido el principal obstáculo para el desarrollo de las políticas sociales y económicas.

De igual manera, el proceso de la consolidación de las instituciones a través de una eficiencia de poderes y una cooperación entre ellos, se vuelve una estrategia eficaz para la satisfacción de las necesidades demandadas por los ciudadanos que han depositado por medio de elecciones libres su confianza en los actores políticos, para que se dicten políticas que sean coherentes con las necesidades del país.

Por lo tanto, es necesario que las estructuras y mecanismos que permiten la consolidación de la seguridad y legitimidad, sean basadas en los fundamentos y fines del Estado, enmarcados dentro de los límites de éste, y sostenidos dentro de las capacidades y alcance de cada una de las partes que hacen parte del proceso, pues, cada una de las medidas que se tomen para subsanar las deficiencias y necesidades de éste deben tener la base para que se puedan llegar a efectuar, y por medio de de eficiencia de éstas lograr el desarrollo deseado.

Por ésta razón, por medio del presente trabajo se analizarán las estructuras, herramientas y procesos básicos que permiten que se dé un proceso de consolidación de cada una de las instituciones y sectores que hacen parte del Estado. De igual manera se determinará como por medio de éstos se fortalece y se legitime el concepto de seguridad, y que tiene como base principal el monopolio de la fuerza, lo que lleva a un acercamiento a la construcción de Estado. Es por tanto que, por medio del análisis del monopolio de la fuerza y la legitimidad de quien lo detenta, en este caso, el Estado, se mostrará cómo a través de éste se crean unas condiciones seguras para que se den los procesos necesarios que garantizan el desarrollo político y social.

Por consiguiente, el análisis de cada uno de los procesos ya mencionados, servirán para determinar, cuáles fueron los mecanismos, estrategias y medidas que tomaron las administraciones establecidas durante la década de los noventa

cuya principal finalidad fue el fortalecimiento y consolidación de las instituciones del Estado, las cuales fueron en gran medida la respuesta a las exigencias y la debilidad del poder político producto de un contexto social y público violento y corrupto.

Por consiguiente, la década de los noventa fue crucial en la historia del país, pues durante ese periodo se sentarían las bases de un Estado en proceso de construcción, por medio de reformas y medidas que afianzarían la confianza por parte de la sociedad en cada una de las instituciones del Estado.

De manera que, primeramente en capítulo inicial se determinarían los procesos básicos que necesita un Estado para su desarrollo, y por medio de éstos se dé una consolidación estatal llevando a la construcción del Estado. Así mismo, se analizará por medio de los planteamientos de Max Weber acerca de cada una de las partes que influyen en el flujo estatal, y principalmente su énfasis en la importancia que tiene el monopolio de la fuerza por parte del Estado, y como a través de éste se legitima las acciones y los fines de cada una de las instituciones que pertenecen al mismo.

En consecuencia, el segundo capítulo contextualizará cada uno de los procesos antes mencionados, determinando su injerencia en el proceso de construcción de Estado, evidenciando su importancia y necesidad en éste, pues cada uno de éstos influye en el desarrollo de los otros, y todos en conjunto hacen parte esencial para la construcción estatal. De igual manera se mostrara conceptos inmersos dentro de estos procesos que actualmente son relevantes a la hora de plantear políticas de desarrollo, como lo es las capacidades y el alcance del Estado

Por último, se hará un breve recuento de los hechos más significativos que marcaron la década de los 90's en Colombia, resaltando las medidas y herramientas que se utilizaron para consolidar las instituciones debilitadas, producto de un contexto violento y una crisis en el sector político que por años ha

aquejado el país; lo cual generó en la sociedad la necesidad de cambio, de establecer medidas que permitieran la consolidación de las instituciones y la reestructuración de éstas que posibilitando la posible salida al conflicto armado. De igual manera las medidas que se dispusieron en materia de seguridad para lograr la consolidación de la paz y la detención de las armas por parte del Estado, pues el primordial reto durante esa década fue la consolidación de la seguridad de los colombianos.

Proceso para la construcción y consolidación del Estado.

*"El político debe tener:
amor apasionado por su causa;
ética de su responsabilidad; medida en sus actuaciones."*

2.1 Max Weber: Fundamentos teóricos a la construcción de estado.

Este capítulo será un bosquejo de los elementos y las bases principales que debe tener un proceso de construcción de Estado, haciendo énfasis en los conceptos de seguridad y legitimidad, fundamentos que han sido marcados como esenciales para que se pueda llegar a dar un proceso eficaz de construcción y consolidación del estado.

Por consiguiente, a través de la concepción de Max Weber y sus estudios sobre el uso legítimo de la fuerza y la legitimidad en el empleo de ésta por parte del Estado; y de igual forma de cada uno de los elementos y herramientas que hacen parte del armazón del Estado para cumplir sus fines; servirá para analizar su papel en el proceso, siendo la base teórica para poder exponer el objetivo previamente expuesto.

Primeramente, Weber afirma que la política es una lucha por el poder, la cual está limitada dentro de las pautas de la legitimidad; por un lado dentro del marco jurídico del Estado, cuando existe una dominación legal, que contiene normas objetivas que permiten disminuir las probabilidades de conflicto, y si estas llegaran a estallar, ellas permitirán resolver las pugnas que emergieron.

Por otro lado, están las pautas que se justifican en la moralidad del quehacer político, que se plasman en dos tipos de ética: la de convicción y la de

responsabilidad; generando expectativas de conducta las cuales llevan a la voluntad de los líderes políticos a estar ceñida, por las esperanzas que han sido depositada en ellos.

Por tal motivo, los mecanismos institucionales y las pautas morales inherentes de la política promueven perspectivas de conducta que limitan la *pleonexia del poder*¹ de los actores políticos, viéndose obligados ajustar su conducta a referentes normativos externos que se hallan por encima de ellos.

Por otro lado, Weber (1981) afirma que la economía política es una ciencia política, servidora de ésta, basándose en que sus criterios de valoración y sus guías para las políticas económicas deben estar y encontrarse en la razón del Estado. El Estado nacional es para Weber no algo indeterminado sino, la organización terrenal del poder de la nación, que legitima las acciones del Estado. Para (Weber, 1963) el concepto de nación es fundamental, definiéndola como:

Un grupo humano unidos por una comunidad de lengua, de religión, de costumbres o de destino, a la idea de una organización política propia ya existente o a la que se aspira: cuanto más se carga el acento sobre la idea de "poder", tanto más específico resulta ese sentimiento, ese pathos. (p. 78)

En conciencia, para Weber los interesados en la pacificación son ante todo los que se beneficiaran con el desarrollo del mercado, donde la seguridad pública es la base para la amplitud del mercado disolviendo los monopolios, generando en la sociedad un interés en el mercado y su participación en éste.

Por otra parte, afirma que la autoridad de un poder de mando puede expresarse en un sistema de normas que con anterioridad han sido pactadas u otorgadas,

¹ Viene de la palabra griega *pleonektis*=codicioso o avaro; apetito insaciable de poseer bienes materiales; deleite personal ocasionado por el ejercicio del poder.

siendo legítimo puesto que ese sistema de normas racionales han legitimado ese poder y por consiguiente al que dispone del mismo, por lo que se obedece a las normas no a la persona. “La comunidad política monopoliza la aplicación legítima de la fuerza mediante su aparato coactivo, y se transforma gradualmente en un instituto protector de los derechos”(Weber,1963,p.33, vol.IV). Por lo tanto, en caso de amenaza de guerra del exterior o de un propio ímpetu guerrero, nace con facilidad una actuación política colectiva sobre ésta base.

En consecuencia, para Weber la importancia del monopolio de la fuerza es un elemento para que el Estado sea eficaz, puesto que, un estado seguro será un lugar con las condiciones necesarias y requeridas para que no sólo el mercado se desarrolle sino de igual manera la sociedad. De ahí que el Estado necesitara del personal necesario al servicio del éste para que quienes intenten transgredir a éste, sean corregidos; por lo tanto, el Estado reclamará y detentará de manera legítima el monopolio de la fuerza.

2.2 Elementos constitutivos del Estado: Territorio, Población y Soberanía.

Weber (1963), a comienzos del siglo XX definió el Estado como:

«aquella comunidad humana organizada para la política que ha existido, pero como todas las asociaciones políticas que hubo en la historia antes que él, el Estado es también una relación de dominación de hombres sobre hombres que se sostiene por medio de la violencia legítima y que necesita para subsistir que los dominados acaten la autoridad de quienes en ese momento dominan»(p.81)

Por consiguiente, con el surgimiento y la consolidación del Estado- nación, se reconoce varios fundamentos económicos y materiales fundamentales que dieron lugar al proceso, sin embargo, tres elementos serían elementales para la constitución del Estado; el territorio, población y la potestad estatal o soberanía.

De acuerdo a Malberg (1948), el primer elemento constitutivo del Estado es el Pueblo, se entenderá como:

(...)el número de individuos que constituyen cada Estado puede ser variable pero es suficiente que ellos hayan conseguido formar un cuerpo político autónomo y distinto de los estados vecinos, porque un Estado ante todo es una comunidad humana, una forma de agrupación social que constituye la nación”(p. 129-130).

El segundo elemento del Estado; el territorio, Malberg (1948) lo define como:

(...) uno de los elementos que permiten que la nación realice su unidad. Pero, además, una comunidad nacional no es apta para formar un Estado sino mientras posea un suelo, una superficie de tierra sobre la cual pueda afirmarse como dueña de sí misma e independiente, es decir , sobre la cual pueda, al mismo tiempo, imponer potestad y rechazar la intervención de toda potestad ajena”(p. 22-23).

Y el último de los elementos constitutivos del Estado; la soberanía o potestad estatal, el cual da lugar a la unidad nacional, que emana en el seno de la nación; de acuerdo a la definición de Norberto Bobbio N. M., (2008), “la soberanía pretende ser una racionalización jurídica del poder, en el sentido de transformar la fuerza en el poder legítimo, el poder de hecho en poder de derecho”(p.1483), de igual forma plantea que:

(...) el soberano pretende ser exclusivo, omnicompetente y omnicompreensivo, en el sentido de que sólo él puede intervenir en cualquier cuestión y no permitir a otro decidir: por esto, en el nuevo estado territorial, las únicas formaciones armadas permitidas son las que dependen directamente del soberano (p.1483).

2.3 Sociedad, Nación y Cultura Política.

Los individuos portadores de derechos y obligaciones, con capacidad jurídica para participar en la toma de decisiones políticas, libres, iguales, que forman parte de diversas colectividades políticas, se les denomina ciudadanos². Es así como, la agrupación de los ciudadanos en una sociedad da lugar, como consecuencia, a la sociedad civil ya que, interactúan los unos con los otros a partir de su voluntad.

En consecuencia, ésta interacción va ser la base del desarrollo del individuo dentro de la sociedad civil. Para que se dé éste proceso de manera eficiente y continuo, es importante que se determinen ciertas reglas sociales obligatorias que establezcan conductas necesarias para que se dé orden y equilibrio, por lo cual se requiere de un complemento que sea garante de las libertades, derechos y deberes individuales, este complemento se le denomina sociedad política (Favela,2007).

De igual forma ésta sociedad política crea sanciones respectivas, cuando el individuo viola o transgrede estas reglas, al ser parte de un proceso cíclico de la estructura de una vida social organizada.

Los individuos tienen derechos inalienables anteriores a la formación de las mismas sociedades y que esas sociedades se forman, precisamente, para preservar esos derechos que son denominados naturales, es decir, no otorgados por ningún poder sino consustanciales a cada hombre. (Favela, 2007, p. 94

² El término tomo fuerza después de la Revolución Francesa, allí, se hizo un uso amplio y generalizado del término.

2.3.1 Nación

De acuerdo con Anderson, el cual define la nación como una comunidad³ política imaginada, como inherente y soberana; enfatizando en la palabra imaginada, puesto que como muchos autores lo han planteado la nación es una voluntad colectiva, un concepto que reside en las ideas, en los sentimientos, que no se impone. Weber la define como la posesión por ciertos grupos humanos de un sentimiento específico de solidaridad frente a otros. (p. 49 vol. IV)

(...) en la nación, la comunidad de cultura y el orden militar se unen para crear la unidad política, a la vez conforme con la naturaleza, puesto que todos los individuos participarían de la ciudadanía, e ideal, puesto que la paz reinaría entre los seres colectivos, libres y, por lo tanto fraternos, el día en que cada nación hubiera realizado su destino. (Aron, 1963, p.353).

Por lo tanto, la nación es sentida, como un medio para ponerse de acuerdo y avanzar en conjunto; para muchos autores éste concepto va mucho más que compartir una cultura, costumbres, lenguaje; de acuerdo con (Chabod, 1987) la nación es un todo orgánico por unidad de fin y facultades.

(...) la nación, como tipo ideal de unidad política, tiene triple característica: la participación de todos los gobernados en el Estado, bajo la doble forma de reclutamiento y del sufragio universal, la coincidencia de sus derechos políticos de una comunidad de cultura, y la total independencia del Estado nacional hacia el exterior. (Aron, 1963, p.354)

De tal manera que, la idea de nación será valiosa para los estados que son unidos políticamente; dejando de ser solo un sentimiento para convertirse en voluntad; unidos por valores, afectos, sacrificios, por un fin.

³ Como comunidad porque, independientemente de la desigualdad y la explotación que en efecto puedan prevalecer en cada caso, la nación se concibe siempre como un compañerismo, profundo, horizontal, en esta última instancia, es esta fraternidad la que ha permitido, durante los últimos dos siglos, que tantos millones de personas mueran y, sobre todo, estén dispuestas a morir por imaginaciones tan limitadas. (Anderson, 1993)

2.3.2 La Cultura Política

El conjunto de valores, actitudes, creencias, ideales, sentimientos, pautas de comportamientos y valoraciones que predominan en los ciudadanos respecto al papel que éstos tienen y desempeñan en el sistema político se le denomina cultura política. Según Del Castillo (1997), plantea que los elementos que constituyen la cultura política están determinados, por experiencias colectivas o individuales; como lo es la educación y las clases sociales.

La composición de diferentes interacciones entre el individuo y la sociedad determina el resultado de la cultura política, donde la comunicación, siendo un canal fundamental para la interacción social, se vuelve indispensable en éste proceso. Los medios de comunicación en sociedades con un sistema político democrático, son de gran importancia e influencia, siendo agentes de socialización política y configuradores de espacios públicos, donde se genera una interacción de información que congrega las instituciones y la opinión pública.

De acuerdo a Inglehart (1991), existen algunos indicadores que caracterizan la cultura política de un país: El interés por la política (nacional o internacional), como el seguimiento de procesos políticos; la valoración de la acción política y eficacia de los líderes nacionales y extranjeros; la confianza en las instituciones y en los procedimientos y la valoración de las coyunturas críticas de acción política y el grado de de participación política, tanto electoralmente como la afiliación sindical o partidista, o las simpatías a éstos u otros agentes de intermediación política, social o económica (Crespo, 1997).

En consecuencia, para la instauración y estabilidad de los regímenes democráticos es indispensable unos determinados valores y orientaciones políticas por parte de los ciudadanos, de igual forma debe existir una estrecha relación entre el nivel de desarrollo económico y la democracia, y el puente entre estos dos términos será establecido por la cultura política.

Por lo tanto, el compromiso de los ciudadanos con las instituciones en periodos donde surjan problemas de eficacia, junto con la confianza interpersonal son rasgos fundamentales de la cultura política democrática, “las pautas culturales, una vez establecidas, poseen una autonomía considerable y pueden influir en los fenómenos políticos y económicos subsiguientes” (Inglehart, 1988, p. 45-65)

2.4 Fines del Estado: Economía, Seguridad y Bienestar.

El Estado y la economía

De acuerdo a Adam Smith (1981), la riqueza de una nación se determina por la capacidad que éste tenga para producir bienes y servicios, la división del trabajo para la transformación de las materias primas es producto de una sociedad bien gobernada, que genera bienestar y satisfacción de las necesidades de los ciudadanos.

Al contrario de los mercantilistas, Smith sostenía que era poco necesario y adecuado la intervención de controles gubernamentales en la economía, enfatizando en la política de *laissez faire*⁴, la cual para el generaría las condiciones adecuadas para maximizar la riqueza de cada nación. Según esta política, se debe eliminar las barreras, garantizando que el mercado opere sin restricciones.

En consecuencia, una economía moderna basada en el desarrollo industrial, debe tener coherencia con la especialización de la sociedad que la sostiene, y de la mano con las instituciones que permitan el fortalecimiento de las empresas para

⁴ Expresión francesa; *laissez faire, laissez passer* «*dejad hacer, dejad pasar*» fue un principio rector del liberalismo económico refiriéndose a la completa libertad en la economía, mínima intervención de los gobiernos. Bealey, F. (2003). *Diccionario de Ciencia Política*. Madrid : Istmo, S.A.

fomentar las capacidades que desarrollen e innoven los procesos de transformación de materias primas, puesto que el desarrollo asimétrico de ésta interacción dará como resultado una desigualdad social, donde solo unos pocos sean los que poseen los medios y capacidades para el desarrollo económico y la satisfacción de las necesidades.

Por ende, el intercambio de mercancías entre los países, genera beneficios y ventajas para las naciones que estén dentro del marco del libre comercio, sobre todo en términos de desarrollo, además de superar la estrechez de los mercados domésticos, elevando la productividad de los recursos y estableciendo políticas de especialización de la mano de obra para una eficaz competitividad dentro del comercio internacional.

En consecuencia, el rol del Estado moderno en el libre tránsito comercial y dentro del mercado económico, es el de la regulación y la armonización de la relación entre el productor y el consumidor de bienes, por medio de normas que le permitan limitar acciones que pudiesen perjudicarlo, de igual forma, le evita convertirse en un actor influyente mas allá de ser el árbitro de ésta interacción. Weber (1963) afirma que “Las regulaciones de mercado ha aumentado constantemente con el incremento formal de mercado” (p.63).

“ las fuerzas productivas de los pueblos no sólo están condicionadas por la laboriosidad, el afán de ahorro, la moralidad y la inteligencia de los individuos, o por la posesión de los recursos naturales o capitales concretos, sino también por las instituciones y leyes sociales, políticas y civiles, y especialmente, por las garantías de permanencia, autonomía y poder su nacionalidad.” (List, 1997)

2.5 Estructura Institucional: los partidos políticos y el Estado de derecho

2.5.1 Partidos Políticos

La estructura de los partidos políticos se caracteriza por tener un carácter de heterogeneidad, sin embargo, según lo que plantea Duverger (1957) un partido es una multitud de individuos ligados por cierta solidaridad, donde se ven integrados en un marco institucional, que determinará los mecanismos de la elección de dirigentes y los poderes de éstos.

Por consiguiente, se les llama partidos a las formas de socialización, que se da por medio de un reclutamiento libre, con el fin de brindar a sus miembros activos la realización de los objetivos concretos, generalmente éstos objetivos tienen como finalidad influir en el seno del Estado, intentando ocupar posiciones en él para que se dé la obtención de sus intereses; son vehículos capaces de unir aquellos que comparten opiniones políticas similares. (Ware, 2004). Los partidos pueden emplear toda clase de medios para el logro del poder. (Weber, 1963)

Por tal razón, las opiniones políticas homogéneas dentro de un partido, son la expresión de un conjunto de similitudes profundas: creencias, actitudes y valores, consideraciones que incita a los individuos a formar parte de éste, teniendo la convicción que por la afinidad, se verán representadas sus necesidades, sin participar directamente. Por consiguiente, Sartori señala que:

(...) los partidos dan algo que no puede brindar ninguna encuesta y ninguna máquina, transmiten unas exigencias respaldadas por una presión... los partidos no sólo expresan, también canalizan, organizan la caótica voluntad pública ... los partidos también forman y manipulan la opinión.(p.57)

Por lo tanto, siendo los partidos instituciones, señala (Haro, 2007); éstos se desempeñan bajo una organización formal, con reglas y procedimientos que conducen a ciertas conductas acordes a éstas; el marco institucional, que

determina mecanismos de selección de los dirigentes y los poderes que éstos detentan. De aquí que, esta será el armazón de fuerza y eficacia de cada uno de los partidos o la ineficiencia y debilidad de los mismos.

Por ende los Estados modernos con regímenes democráticos, fundados junto a una pluralidad de partidos políticos organizados, son naciones en las cuales, los gobernantes son escogidos bajo un marco legal constitucional que permite que se lleven a cabo elecciones legítimas y libres, donde no se excluye ni se reprime a ningún individuo que no participe en éstas; la actividad de la política es una actividad de “interesados”, bien sea del poder o formas amorfas de éste.

“El ciudadano moderno, en el ejercicio de sus derechos y obligaciones ejerce las libertades que esos derechos le otorgan y es ahí cuando establece prácticas políticas basadas en la cultura imperante en una sociedad y establece vínculos de sociabilidad que contribuyen al entramado social de dicha comunidad política”.(Favela, 2007, p.95).

En consecuencia la limitación del poder, fue un mecanismo necesario para la división de poderes del Estado; el pensamiento liberal junto con el derecho positivo fueron la base para que éste proceso se diera acabo. La separación de poderes no es una separación de funciones, según lo plantea el derecho positivo, sino que, la misma decisión adquiere un valor diferente de acuerdo a las condiciones y autoridad en las que se tome ésta.

De acuerdo a Sartori, “para los verdaderos padres fundadores del liberalismo significa rule of law (imperio de la ley) y Estado Constitucional y la libertad era la libertad política (la libertad de la opresión política). (Torres, 2007). De ahí que, Weber afirma que la división especificada de poderes es:

(...) la distribución de poderes entre distintos diversos titulares- racionalmente determinados como “funciones” en el caso de legalidad (división constitucional de poderes)- de modo que sus disposiciones sólo

sean legítimas , en asuntos correspondientes a varios, si se forman por un compromiso(p.296. vol.1).

2.5.2 El Estado de derecho

A partir de la firma de la declaración de los derechos del hombre y del ciudadano después de la Revolución Francesa, que dieron al individuo las herramientas para garantizar su integridad física y moral; la declaración definió los derechos naturales y colectivos como universales, entendiendo universal como la validez que tienen sin importar el momento, ocasión y lugar; de igual manera enfatizó en los derechos inalienables del hombre; concepción de corte iusnaturalista, la cual reconoce que los derechos son propiedades del ser humano, le son propios y no se les pueden enajenar.

Por lo tanto, los derechos inalienables son anteriores a la formación de las sociedades, y éstas se forman precisamente con el fin de preservar esos derechos que son denominados naturales; los cuales no son otorgados por ningún poder, sino son derechos inherentes a cada hombre, como lo son el derecho a la vida y a la propiedad, de igual forma el derecho a defenderlos.

Adicionalmente, a raíz de la revolución, se dio a la carta la naturaleza al concepto de ciudadano, el cual generaliza los derechos a todos los hombres y su aspiración a participar de las comunidades políticas de una manera abierta, sin ningún tipo de exclusión; y de igual forma, dando ciertas obligaciones a ésta participación que en cierto modo le da un sentido. De acuerdo a (Kelsen, 2005):

(...) el estado es una relación de dominio, es decir, una relación en la cual la voluntad de uno se convierte en motivo de la conducta de otro, a la cual se dirige la primera voluntad; o bien el Estado es el mismo titular del *imperium*, cualificado de algún modo, cuya voluntad vincula a los individuos que le están sometidos (p. 12).

Por lo tanto, Hans Kelsen (1995) que plantea que el derecho es un orden de la conducta humana. Un “orden” es un conjunto de normas, que tienen el tipo de unidad a que nos referimos cuando hablamos de un sistema (p.3), entonces, el derecho es un conjunto de normas que regula la conducta humana que permite que se dé una unidad y un orden dentro de la sociedad.

En consecuencia Weber (1963) plantea que:

(...)sí se da un derecho garantizado y si es organizado el uso del aparato coactivo para el ejercicio no violento de esta coacción jurídica y que posea de hecho un peso tal que, por término medio, exista en grado prácticamente importante la probabilidad de que una norma válida sea observada a consecuencia de la existencia de aquella coacción jurídica. Hoy la coacción jurídica violenta es un monopolio del estado (p. 305, vol. II).

Debido a esto, Weber Plantea que el derecho moderno se compone de preceptos jurídicos y de igual manera de derechos subjetivos por los cuales un individuo puede ordenar, prohibir o permitir a otro un determinado comportamiento.

Por otro lado, (Bobbio, 2009) afirma que el Estado le debe garantizar a los individuos el derecho a la seguridad, por lo tanto, en la medida que el propio Estado se garantice su propia seguridad, le garantizará la seguridad a los ciudadanos; de ahí que, el Estado tiene derecho de castigar a los que amenacen la seguridad de los ciudadanos para que se les garantice el derecho a la seguridad de los mismos.

Después de la Segunda Guerra Mundial y de la fundación de las Naciones Unidas, se instaura un nuevo concepto sobre los derechos del hombre; los derechos humanos⁵, que han sido protegidos por medio de convenciones, acuerdos, tratados y pactos internacionales.

⁵ La Declaración de los Derechos Humanos de 1948 está enmarcada en tres elementos contextuales significativos: a) la aceptación universal del valor que la persona humana tiene en sí misma, esto es, la

Adicionalmente, hoy se hace una distinción de orden entre ellos, sin tener una jerarquía, sólo es una clasificación que permite que se establezca una coherencia entre éstos; por tal razón, actualmente se habla de derechos de 1.^a, de 2.^a y 3.^a, generación.

En consecuencia, se habla de los derechos humanos de primera generación cuando se hace referencia a las libertades civiles y políticas de las personas, por los que garantiza el derecho a la vida, libertad, protección de las leyes, protección a la propiedad, libertad de conciencia, asociación, participación política, entre otros. Como lo afirma (Gavia, 2007); estos derechos también son llamados de libertad, pues son los que plantean que el individuo es libre para ejercer sus actividades y requiere de un sistema político que garantice y preserve esas libertades individuales y colectivas (p. 99).

Por otro lado, los derechos de segunda generación, o derechos sociales, son aquellos que proporcionan a los individuos condiciones mínimas de bienestar e igualdad. La garantía de éstos derechos depende de cierta manera de que se cumplan los de primera generación, puesto que si se está dando una representación política adecuada de los ciudadanos, éstos derechos por ende se garantizan.

Por último, están los derechos de tercera generación, los cuales no se han podido catalogar de una forma precisa, sin embargo, algunos autores los denominan como derechos que garantizan las condiciones para que los de primera y segunda generación se garanticen, como los son: el derecho a la innovación, al medio ambiente, a la paz, a la diversidad cultural, entre otros.

validación de la noción de individuo aportación fundamental de la cultura occidental; b) la aceptación universal de la participación de los individuos en libertad dentro de sus comunidades políticas, esto es, la aceptación de la democracia como forma deseable de gobierno; c) la aceptación universal de que las personas tienen derecho a mínimos de bienestar, esto es, que es deseable que los seres humanos tengan derechos sociales y derecho al desarrollo sustentable, a la paz, a un medio ambiente sano, a la preservación de sus culturas. (Gavia, 2007,p.98)

En contraste, y de acuerdo a lo que plantea (Gavia, 2007), los sistemas políticos con libertad, igualdad, participación y distribución de poder, han sido llamados democracias liberales.

Primeramente, la democracia ha sido utilizada desde Aristóteles en la antigua Grecia, el cual hacía alusión para significar el gobierno del pueblo, era parte de una tipología que determinaba las formas de gobierno de acuerdo a criterios⁶ que él había establecido.

En suma, el principio fundamental en una constitución democrática, es la libertad; que garantiza que los hombres participen libremente. Por tal razón, esto se ve evidenciado por medio del sufragio; donde se expresa la voluntad del pueblo en el camino de la libertad y la democracia. Plantea (Sen, 2006) que:

(...) la democracia debe otorgar un lugar capital a la garantía de la discusión libre, y a la interacción nacida de la deliberación, tanto en el pensamiento como en la práctica política – y no sólo gracias a las elecciones o durante las elecciones (p.14).

De manera que, (Bobbio, 2001) plantea que el flujo de poder no debe tener dos direcciones; es decir o tiene que ser ascendente, de abajo hacia arriba; o es descendente, de arriba hacia abajo. Si se da el primero, es un poder político que se ejerce en todos los niveles, sin importar lugar y extensión territorial, y es en nombre del ciudadano. De igual manera afirma:

(...) el proceso de democratización, o sea, el proceso de expansión del poder ascendente, se está ampliando de la esfera de las relaciones políticas, de las relaciones en las que el individuo es tomado en consideración en su papel de ciudadano, a la esfera de las relaciones

⁶ Aristóteles elaboró la tipología de las formas de gobierno de acuerdo a dos criterios: a quién sirve el gobierno, y cuántos gobiernan. (Gavia G. E., 2007, p. 112)

sociales, donde el individuo es tomado en consideración en la diversidad de sus *status y papeles* específicos⁷(p.63).

Por lo tanto, cada uno de estos procesos hace parte de la construcción de un Estado, el cual necesita de éstos para que pueda consolidarse, para que cada institución que hace parte de éste tenga la estructura adecuada, dando flujo correspondiente a cada uno de los procesos que permiten que se cumpla el fin, del Estado y de las instituciones; la respuesta por la cual fueron creadas.

⁷ Por ejemplo: como empresario y como trabajador, como maestro estudiante, como oficial y como soldado, como productor y como consumidor.... (Bobbio, El futuro de la democracia , 2001,p.63)

Procesos de construcción de Estado, contribución a la consolidación estatal

En este capítulo se identificara la importancia de cada uno de los elementos que participan en el proceso de construcción de Estado y consolidación estatal; partiendo de los parámetros en los que por consolidación de un Estado, se entenderá el proceso en el cual un Estado se encuentra afianzando su institucionalidad y su estructura a través del consenso social, fuente de su poder, con la finalidad de alcanzar sus principales objetivos, satisfaciendo sus principales demandas en el desarrollo material y humano, que generen bienestar y garanticen seguridad a sus ciudadanos, pues de su nivel de desarrollo se deriva la posibilidad de que puedan llegar a brotar causas internas que pudiesen afectar el equilibrio y la seguridad interna, de ahí que, una mayor legitimidad y legalidad del Estado reduce dicho impacto. Por lo tanto, Jagers Keith(1992) plantea que:

El proceso de consolidación de un Estado es el proceso a través del cual es estado no sólo progresa en productividad económica y autoridad gubernamental, sino que en imponer su poder político e institucional. Más precisamente en el poder de las elites de un Estado para imponerse a las fuerzas políticas, sociales y ambientales que se oponen a sus objetivos políticos. Dado estos requerimientos, el poder de un Estado tiene tres dimensiones: poder como capacidad nacionales; poder como capacidad política y poder como coherencia institucional.(p.448) (citado por (Spielman, 2007)

En consecuencia, en un proceso de construcción de Estado la base para la consolidación de éste, será entonces la legitimidad de los elementos principales y de acuerdo con el concepto Weberiano en su definición de Estado, el cual hace

referencia como principales elementos constitutivos: la población, territorio y potestad política o soberanía.

Por consecuencia, se entenderá por población, el conjunto de personas con características homogéneas que ocupan un mismo espacio geográfico, siendo el umbral del poder político y de las decisiones. Un segundo elemento es el territorio como medio necesario para el desarrollo de toda actividad humana, sobre el cual el Estado ejerce su soberanía, y de manera legítima se da la relación política entre los gobernados y gobernantes, “el territorio se convirtió en un elemento clave del proceso de consolidación estatal, en un requisito ineludible para reestructurar la sociedad y la política nacional” (Quijada, 2000).

Por último, la potestad política o soberanía, se entenderá por ésta; “poder político donde emanan las instituciones del Estado, siendo supremo y soberano, que posee el uso legítimo de la fuerza física para garantizar la seguridad y la satisfacción de las necesidades.”(Bobbio, 2000, p.129).

La condición necesaria y suficiente para que exista un Estado es que en un territorio determinado haya un poder capaz de tomar decisiones y emitir los mandatos correspondientes, obligatorios para todos los que habitan en ese territorio, y obedecidos efectivamente por la gran mayoría de los destinatarios en la mayor parte de los casos en los que se requiere la obediencia cualesquiera que fueran las decisiones (Bobbio, 2000, p.129)

Por lo tanto, el poder público es la capacidad del Estado para alcanzar los objetivos deseados, los ciudadanos disponen, organizan, dan forma, y abren canales de expresión por medio del poder político; que sirven como medio para que sus necesidades se vean reflejadas en cada una de las decisiones y leyes que el poder político disponga para que éstas sean satisfechas, logrando que se dé una legitimidad estatal.

Siendo el poder político un elemento esencial dentro de la sociedad, éste precisa que debe ser organizado, y que para que se fortalezca debe ser necesario que

tenga un carácter verdadero, sostenido en el manejo prudente de los asuntos políticos y públicos. De acuerdo con Velázquez (1990), en el Estado de derecho el poder político está subordinado a éste, se organiza y funciona dejando por fuera todo comportamiento arbitrario del gobernante. (p. 47)

Por ende, cuando el poder se ejerce dentro del marco de las leyes, lo cual permite que se limiten los intereses personales, y se tienen en cuenta las necesidades de grupos que sirven de intermediarios entre el Estado y el individuo, como lo son los partidos políticos o agrupaciones con intereses socio-político, se habla que es entonces un poder estatal.

Por lo tanto, la finalidad del Estado será la protección real y efectiva de los derechos fundamentales de los ciudadanos y la garantía de los medios que permitan que paulatinamente dentro de un orden de libertad individual, bien común y justicia social puedan desarrollarse. De acuerdo a Ramírez (2008), el Estado representa la institucionalización del poder político⁸, por lo que, cuando el poder de cada uno de los ciudadanos o representantes de las necesidades sociales, pasa a ser representado por las instituciones, se dice que existe la forma estatal de poder.

En consecuencia, un punto determinante en el proceso de consolidación estatal durante la época de los ochentas y noventas después de la ola comunista en la mayoría Estados Europeos, fue reducción del papel estatal, ya que el modelo que se había implementado en algunos de estos Estados había dejado grandes vacíos económicos y sociales, en consecuencia, algunos académicos de la época

⁸Para Weber existen tres tipos puros de dominación legítima, donde el fundamento primario de su legitimidad puede radicar en: 1) De carácter *racional*: que descansa en la creencia en la legalidad de ordenaciones estatuidas y de los derechos de mando de los llamados por esas ordenaciones a ejercer la autoridad (autoridad legal). 2) De carácter *tradicional*: que descansa en la creencia cotidiana en la santidad de las tradiciones que rigieron desde lejanos tiempos y en la legitimidad de los señalados por esa tradición para ejercer la autoridad (autoridad tradicional). 3) De carácter *carismático*: que descansa en la entrega extracotidiana a la santidad, heroísmo o ejemplaridad de una persona y a las ordenaciones por ella creadas o reveladas (autoridad carismática). (Weber, 1963p.224)

vieron necesario preguntarse sobre el alcance y las limitaciones del Estado, el tamaño y la fuerza de éste.

En efecto, Francis Fukuyama (2004), plantea la importancia de distinguir entre el alcance de las actividades estatales las cuales “consiste en las diferentes funciones y objetivos que asumen los gobiernos” (p.23), y a lo que él denomina la fuerza del poder del Estado como la “capacidad de los Estados para programar y elaborar políticas y aplicar las leyes con rigor y transparencia (p.23), a lo que hoy muchos autores determinan como la capacidad estatal o institucional.

Por lo tanto, el alcance de las actividades estatales comprende desde actividades necesarias e importantes a las opcionales, sin embargo, encontrar un punto de acuerdo entre cuál debería ser la jerarquía de éstas ha sido complejo, pues siempre existirá la disyuntiva entre qué debe ser primero, si garantizar el orden público o crear una política de salud pública.

De esta manera, indica Skocpol” que dicha capacidad puede (y debe) analizarse en función del desarrollo (o fortaleza) de las estructuras organizacionales”(citado por). De tal manera que las estructuras se vuelven centrales ya que influyen no sólo en las capacidades políticas de las clases dominantes sino de igual forma de las clases subordinadas, garantizando la posibilidad de que se mantenga el orden.

Por esta razón, Fernández (2001) plantea que la capacidad del Estado y el desarrollo de sus estructuras tienen dos dimensiones complementarias, básicas para explicar la existencia y el alcance de éstas: la primera hace referencia a las estructuras internas del Estado; la solidez de los recursos organizativos⁹, monetarios y fiscales con lo que cuentan las estructuras estatales¹⁰ y el personal que desempeñan sus funciones. Por consiguiente la segunda dimensión hace referencia a las relaciones de las estructuras y el personal del Estado con los

⁹ El autor hace referencia a los recursos organizativos (información, coordinación y estabilidad).

¹⁰ Las estructuras estatales (administrativas, jurídicas, recaudatorias y coercitivas)

actores, grupos y clases de la sociedad civil, mencionada como capacidad estructural (Fernández 2001.p.49)

Por otro lado, esta la capacidad de elaborar y ejecutar políticas, la promulgación de leyes; una administración eficaz con la mínima burocracia; un alto nivel de transparencia y rendición de cuentas por parte de las instituciones públicas; el cumplimiento de las leyes, para contrarrestar la corrupción y otros males. Hilderbrand y Grindle, plantean que, “La capacidad estatal, es la habilidad de desempeñar tareas apropiadas con efectividad, eficiencia y sustentabilidad”. (citado por Alonso, 2007)

Del tal manera que, el Estado moderno al constituirse como un dominio unificador y unificado, se convierte en el sujeto político predominante, lo cual se vuelve la base para la consolidación del poder del Estado; donde la fase inicial de éste es el fortalecimiento del mismo, sobreponiéndose sobre los demás, que elimina toda autoridad igual o superior, así pues, lo convierte en un poder exclusivo. Éste poder exclusivo detenta de manera legítima los medios de coerción, para asegurara de manera eficaz la protección y seguridad de los asociados.

En consecuencia, sólo el Estado puede administrar la justicia, y por otra, solo él posee las armas para hacerla valer, por lo tanto, el Estado no puede permitir que existan grupos o sectores de la sociedad que posean medios de coerción por fuera de las del marco legal, de igual forma no puede tolerar que exista un grupo que ostente un poder igual o mayor que el de éste.

En este sentido, el papel de consolidación del monopolio de la fuerza será la base para que la consolidación estatal sea efectiva, puesto que en la seguridad de los individuos reposa en gran medida el bienestar de éstos. Si lo ciudadanos sienten otro poder igual o superior al del Estado, y que adicionalmente, y de igual manera ostente medios de coerción, que pueda llegar a quebrantar la seguridad de éstos, se sentirán inseguros, y no tendrá valor la legitimación que goza el Estado para el uso legítimo de la fuerza.

Por tal razón, la búsqueda de condiciones sociales para una calidad de vida donde el desarrollo individual en la sociedad contribuye al desarrollo en conjunto de ésta, conlleva a que las necesidades de la sociedad se conviertan en el punto de partida para la búsqueda del bienestar común; que por medio de la proporción de bienes públicos por parte del Estado, como lo son las leyes, siendo el medio por el cual se dictan políticas de desarrollo que abarcan diferentes ámbitos como la educación, salud, infraestructura, entre otros, para la realización de la sociedad y la satisfacción de las necesidades, respondiendo al consenso entre la sociedad y el Estado.

Así mismo, y de acuerdo a Bobbio (1996), la función de las instituciones políticas es convertir las demandas en respuestas, que se dan por medio de decisiones colectivas de carácter obligatorio para toda la sociedad; éstas decisiones contribuyen en la transformación del ámbito social, las cuales en la medida en que se ejecuten, nacen nuevas demandas, dando continuidad a un proceso, que puede llegar a ser gradual si existe una correspondencia entre la demanda y respuesta.

Sin embargo, si no se llegará a cumplir esta correspondencia, no se podría hablar de un cambio continuo, puesto que las demandas que no tuviesen su respectiva respuesta ocasionan un exceso de demandas, que obstaculizan el proceso continuo y el flujo de retroalimentación. De igual manera, cabe acotar lo que plantea Fukuyama (2004):

La mayoría de los casos en los que la construcción del Estado y la reforma institucional han culminado con éxito, se han producido en sociedades que han generado una fuerte demanda nacional de instituciones y posteriormente las han creado desde cero. (p.60)

Por tal motivo, la desigualdad en el acceso a bienes y servicios, suele poner barreras a la movilidad social, contribuyendo a establecer cristalizaciones en la sociedad, que impiden su progreso. (Pusic, 1979, p. 44) (citado por Cohen Franco,

2005), por esto la importancia de que el Estado provea todos los bienes públicos de con igual y sin excepción, y según Samuelson (1954)(Parsons Wayne, 2007):

La característica que lo diferencia de los bienes privados, es su indivisibilidad, es decir que todas las personas tienen acceso a ellos y que no admiten la posibilidad de exclusión, a diferencia de los bienes privados que son, por definición exclusivos, los bienes públicos se pagan con recursos públicos provenientes de impuestos o endeudamiento, y su precio puede expresarse en el nivel de impuesto necesarios para financiar su producción, a diferencia de los bienes públicos se pagan mediante un sistema de precios que opera en el mercado.(p.44)

De ahí que se hace indispensable la necesidad de optimizar la intervención del Estado regulando los servicios públicos privatizados, para evitar la exclusión y la desigualdad; y a través de la promoción de políticas sociales que le permitan a la sociedad la participación en el proceso de toma de decisiones, siendo éstos los principales benefactores de las reformas estatales e institucionales, fomentando la inclusión social y participativa.

Cabe anotar que la importancia de los procesos modernos como la industrialización y urbanización, han sido un punto importante en términos físicos, donde existe el espacio para materializar las políticas bien sea culturales o sociales, que le ha exigido al Estado a mejorar las infraestructuras necesarias para el desarrollo y la realización de los objetivos, como lo es la cobertura de las demandas de la sociedad.

Por lo tanto, las políticas públicas pasaron de enfocarse en la economía y política, a considerar otros aspectos que hacen parte del desarrollo a través de la satisfacción de las necesidades de la sociedad, adoptando enfoques multidimensionales donde le dan cabida a procesos sociales y culturales, inherentes al proceso de desarrollo individual dentro de una sociedad. Andre Roth, afirma que “existe la política pública siempre y cuando las instituciones estatales

asuman total o parcialmente la tarea de alcanzar objetivos estimados como deseables o necesarios, por medio de un proceso destinado a cambiar un estado de cosas percibido como problemático” (Roth, 2007, p. 27) citado por Arroyave Alzate.

Por su parte, la división y colaboración de los poderes nacieron de la necesidad de que el poder fuera controlado y limitado, por cual, se diseñaron mecanismos que sirvieran de contención a los poderes estatales. Como primera medida se dividió de tipo orgánica y funcional, posteriormente se hizo una diferenciación de tipo territorial para distar si era de ámbito local y nacional, esto se dio con el fin de limitar las funciones, garantizando los derechos y libertades de la comunidad política.

Un Estado con un proceso de consolidación avanzado tendría en consecuencia un sistema estatal con pleno equilibrio de poderes, en que cada órgano estatal desarrolla sus funciones profesionales propias con pleno respaldo de su ciudadanía y en la cual las crisis internas y externas son abordadas en su direccionamiento y solución por las autoridades políticas democráticamente electas y constituidas.(Griffiths,J.2007, p. 448)

De tal manera que, los sistemas políticos actuales vieron necesario la limitación de la titularidad del poder político, por lo que, se hizo preciso la sucesión del poder en periodos, los cuales han sido diseñados por sistemas de elecciones periódicas. Por lo tanto esto permite que los grupos con diferencias ideológicas y políticas puedan llegar a ostentar del poder sin necesidad de cruzar una carrera violenta para alcanzarlo, de igual forma, ésta limitación permite la participación de la sociedad que legitiman el poder político.

Por esta razón, un gobierno constitucional limita el poder del Estado y permite garantizar la protección de los derechos individuales enmarcados en un orden jurídico que está presidido por una constitución preestablecida que organiza al Estado conforme al fin señalado y sustenta cada una de las acciones que éste

promulga. (Bobbio, 2009) afirma que: el constitucionalismo supone el resultado natural de la idea del buen gobierno basado en la supremacía de la ley (p.233).

De igual manera las instituciones estatales, en su conjunto, no sólo deben cooperar de forma adecuada en un sentido administrativo, sino que deben, además, concebirse como instituciones legitimadas por la sociedad correspondiente, esto se da cuando una institución atiende con transparencia y eficacia, dándole respuesta a las necesidades de los ciudadanos. De acuerdo a Maurice Duverger (1955), las instituciones políticas son aquellas relativas al poder del Estado, haciendo principalmente referencia a las instituciones propias de los poderes ejecutivo, judicial y legislativo (p.33).

Por consiguiente la legitimidad de las acciones estatales se consigue a través de la repercusión de los fines que persiguen, esto se da por medio de un proceso por el cual el Estado concurre con las demás asociaciones que persiguen sus propios fines, los cuales tienen organizados los intereses de cada uno de los individuos que hacen parte de él, que no son otros que los fines que el Estado persigue.

Adicionalmente por medio de políticas progresistas y modernizadoras, que conviene adoptar modelos internacionales en materia de comercio e inversión, junto con la necesidad de concretar un efectivo dominio del territorio para fortalecer el Estado. El desarrollo económico nacional será parte determinante en la planificación y aplicación de programas sociales y asistenciales, que promuevan mecanismos que garanticen los derechos de los ciudadanos y la satisfacción de sus necesidades.

(...)una falta de acceso al consumo especialmente grave se produce cuando las personas no pueden lograr la satisfacción de sus necesidades básicas – lo que se expresa en la pobreza y la indigencia-, con lo que se pone en riesgo su sobrevivencia e inserción social. (Cohen Franco Ernesto,2005, p. 44)

Por lo tanto, la importancia en el fortalecimiento de la seguridad por parte del Estado, crea la necesidad de instaurar una política que no sólo consolide las instituciones, sino de igual forma instaure la cooperación entre las mismas; lo cual permita crear mecanismos que actúen y tengan presencia no sólo de tipo local sino regional, para que se dé de manera coordinada el control de los medios de coerción y por lo tanto el Estado detente de manera continua el monopolio de la fuerza. De acuerdo a esto, plantea González (2002):

(...) el control sobre los medios de coerción se ha logrado a lo largo de la historia mediante mecanismos variados, como el acuerdo con los poderes locales y regionales previamente existentes, o su cooptación, el afianzamiento de los cuerpos de la policía o una guerra civil (éste es un punto central para la experiencia colombiana), según sea el grado de urbanización y de la fortaleza de los poderes de los señores locales y regionales.(p.238)

Sin embargo, el monopolio de la fuerza o violencia como lo denomina el sociólogo alemán Nobert Elias por parte del Estado, tiene dos contraposiciones; ya que, si bien pacifica la sociedad, por otro lado, se ve concentrado los medios de coerción en un centro de poder que se puede usar para cualquier sin importar que consecuencias pueda llegar a tener. Por tal razón la vulnerabilidad del monopolio de la fuerza será permanente, pues continúa siendo vulnerable a las acciones de diversos grupos. Gonzalez (2002), afirma que el monopolio es un recurso del poder establecido, pero también puede serlo de sus contrincantes.

De ahí la importancia por parte del Estado de controlar y ultimar los grupos insurgentes e ilegales, pues el objetivo que tienen el común; el poder, lleva a que sin importar los medios se luche por éste. Por lo tanto, la fragmentación del Estado, altera el orden y la unidad, que desemboca en la creación de grupos a lugar de la sociedad, que solo luchan por intereses personales sin pensar en las consecuencias colectivas.

Reformas y consolidación del monopolio de la fuerza: Un camino hacia la construcción del Estado Colombiano (década de los noventa)

Al finalizar una década llena de corrupción, homicidios, terrorismo, narcotráfico; un contexto que generó en la sociedad una necesidad de cambio y protesta a los hechos que sumieron al país en una continua inseguridad e inconformidad; las negociaciones de paz emprendidas entre el M19 y el gobierno de Virgilio Barco, la muerte de Luis Carlos Galán Sarmiento (1989), candidato presidencial por el partido Liberal; el asesinato de Carlos Pizarro León Gómez (1990), candidato a la presidencia por el partido político Alianza Democrática M19; la séptima papeleta, la Asamblea Constituyente que dio origen a la Constitución de 1991; fueron entre muchos hechos el punto de partida para una serie de cambios exigidos por la sociedad.

Tras unas cuantas reformas fallidas a la constitución colombiana en los años ochenta, a comienzos de los años noventa se da un suceso sin precedentes dentro del país; movimientos estudiantiles y políticos proponen la convocatoria de la Asamblea Constituyente para las elecciones de 1990, cansados de los escasos medios de participación ciudadana y en busca de herramientas que le permitieran al Estado combatir la corrupción interna y la fragilidad de las instituciones; producto de una sociedad contaminada por el narcotráfico y la corrupción.

Por lo tanto, la necesidad de cambio y la desconfianza por parte de los estudiantes en la eficacia de las instituciones, y tras el asesinato sistemático de destacados líderes que significaban una renovación en la política, llevó a grupos específicos a crear movimientos de opinión y presión que llevarían a la reforma de la Constitución de 1886. La séptima papeleta fue el mecanismo por el cual se vio reflejada la voluntad de los colombianos, que demandó la instauración de la Asamblea Nacional Constituyente.

(...) la acción del constituyente se convierte en un acto (re)fundador de la sociedad y sirve de paradigma a un “nosotros” que, aun con sus limitaciones históricas específicas, logra aglutinar a los componentes de la nación alrededor del nuevo Estado concebido, simultáneamente, como resultado del acto constituyente y como garante de la nueva Constitución. (Chaparro & Galindo, 2009, p.138)

Tras el asesinato del candidato liberal Luis Carlos Galán Sarmiento, 30 mil estudiantes unieron su voz en pro de rechazo en una marcha a la cual se le denominó la marcha del silencio; éste movimiento juvenil significó la unión de las clases sociales que sin importar lo privado y lo público de la educación los jóvenes aunaron sus ideas y a partir de ahí nacería la propuesta para convocar un plebiscito, que abriría las puertas a una asamblea constituyente.

En consecuencia a la presión juvenil respaldada por la sociedad y algunos candidatos presidenciales, en los comicios de marzo de 1990 se incluye la séptima papeleta con once millones de votos, el pueblo asume su soberanía dando rumbo al objetivo por el cual se había convocado. Por lo tanto el decreto de estado de sitio 927 de 1990 resumió la situación del país en ese entonces.

"los hechos mencionados demuestran a las claras que las instituciones tal como se encuentran diseñadas no son suficientes para enfrentar las diversas formas de violencia a las que tienen que encarar. No es que las instituciones se hayan constituido PER SE en factor de perturbación, sino que han perdido eficacia y se han vuelto inadecuadas, se han quedado cortas para combatir modalidades de intimidación y ataque no imaginadas siquiera hace pocos años, por lo que su rediseño resulta una medida necesaria para que las causas de la perturbación no continúen agravándose, como hasta ahora ha venido ocurriendo, en los seis años de vigencia del Estado de Sitio". (Expediente número 2149-E). Decreto legislativo 927 de 1990 (Moreno, 1996)

Por consiguiente, y tras la elección de Cesar Gaviria el 27 de mayo de 1990, comienza una renovación, un cambio; no sólo social y político, sino de igual manera económico, una transformación demandada por la sociedad. De igual forma junto con el desarme de algunos grupos ilegales que acogieron el llamado al dialogo y al pacificación; hizo posible que se sintiera una atmosfera de reconciliación; “la reforma política era una sentida reivindicación de distintos sectores políticos y sociales” (Torres del Rio, 2010, p.391)

De manera que, se dio el consenso necesario para que las distintas fuerzas políticas del país lograran un pacto político por medio de la asamblea constituyente que permitió el origen de la Constitución del 91; ésta buscaba subsanar por medio de herramientas que permitieran cambiar y luchar para corregir un contexto nefasto para el país; lleno de exclusión social, intolerancia, corrupción, limitaciones de participación política y la continua violación a los derechos humanos.

Por consiguiente, Uprimny (2011) plantea se debía instaurar un orden constitucional, que controlara la arbitrariedad estatal, y que favoreciera la participación de nuevas fuerzas políticas, estimulara el pluralismo y lograra mayor justicia social.(p.41). De ahí que, la Asamblea Constituyente de 1991 fue una expresión de un consenso pluralista, de igual manera tenía una connotación de ser un pacto entre las fuerzas políticas para la transformación democrática de la sociedad colombiana.

Por consiguiente, la principal característica de la Constitución del 91, era su carácter transformador, renovador; sin embargo, a su vez enfatizo en reforzar su fuerza normativa, por lo que no sólo se reconocieron nuevos derechos sino que se dispusieron mecanismos fuertes de justicia constitucional, que garantizaron que los nuevos derechos de bienestar no fueran una retorica mas de las elites políticas. Uprimny (2011), afirma que ésta constitución hace parte de Estados de derecho constitucionales o autores como Carbonell denominan neoconstitucionalismo; por lo tanto, no se limitan a establecer límites o diseñar

las instituciones, y reconocen una amplia gama de derechos y principios, imponiéndole nuevas metas al Estado.

Debido a esto, se hicieron una serie de reformas, en especial en cuanto a los derechos del individuo se refieren; fueron incorporados derechos individuales, civiles, sociales y políticos; los derechos de solidaridad un concepto nuevo que hacen referencia al derecho de los pueblos a reclamar la humanidad del desarrollo, la paz; éstos derechos se pueden equiparar con los derechos humanos de primera, segunda y tercera generación.

Por otro lado, la constitución propone un Estado social de derecho “sui géneris”; defiende la reducción del Estado en aras de la libre empresa, los derechos civiles y la propiedad individual; los derechos civiles y colectivos son parte fundamental de la Carta Magna, por lo que muchos la llaman que es una Constitución con un sentido progresista. De tal manera que, la creación de nuevas instituciones como la Defensoría del Pueblo, la Corte Constitucional, la Fiscalía General de la Nación y el Consejo Superior de la Judicatura; fueron la materialización del cambio en la eficiencia en la garantía de los derechos.

En consecuencia, y concordancia con la demanda de garantías para la protección de éstos derechos por parte de la sociedad, se crea un recurso excepcional dentro del sistema jurídico; la tutela, la cual fue creada en principio para la protección de derechos fundamentales, a nivel local y colectivos, como los son el derecho a la salud, educación y vivienda, entre otros.

De ahí que, el cambio en el preámbulo de la carta de la Constitución la cual busca fortalecer la unidad de la nación y asegurar la convivencia, el trabajo, la justicia, la paz y la libertad; se afirma en la Constitución que la soberanía reside en el pueblo, que el Estado es social de derecho, que es una nación participativa, fundada en el respeto de la dignidad humana.

Por otro lado, el mundo estaba pasando por un cambio económico, donde una economía mundial globalizada en pleno auge y liderada por Estados Unidos, busco una serie de condiciones para impulsar unas transformaciones económicas en los países de América latina y el Caribe. Tras el programa de modernización de la economía adoptada por la administración del entonces presidente Virgilio Barco, quedaron establecidas las bases para el proceso de la apertura económica en Colombia.

Así pues, en la administración sucesora de Cesar Gaviria, se instauran políticas bajo las cuales se orienta el programa de apertura económica. De manera que la modernización de la economía; según como plantea Gamboa (2007), la adaptación institucional a los requerimientos globales del comercio, se hicieron evidentes, como lo fue en el proceso de reducción y nivelación arancelaria y de eliminación de los trámites administrativos correspondientes (p.48).

Por tal motivo, para que se diera ésta modernización, se hizo necesaria una reorganización en el interior de las instituciones como El Instituto Colombiano de Comercio Exterior y el Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN; de igual forma, se crearon nuevas instituciones necesarias para el proceso: El Ministerio de Comercio Exterior, el Fondo de para la promoción de las Exportaciones, el Banco de Comercio Exterior y el Consejo Superior de Comercio Exterior.

Adicionalmente, dentro de una marco de leyes; como lo fue la Ley 142 de 1990, por la cual se le abrió campo al sector privado dentro de los servicios públicos; la Ley 100 de 1993, por la cual se regulo la seguridad social haciendo obligatorio el servicio de salud por parte del Estado así estipulado en la Constitución del 91; la Ley 50 la cual hace referencia a la flexibilización laboral; hizo posible la participación de los ciudadanos, principalmente la de los trabajadores que por medio de huelgas, paros y demás formas de protesta social manifestaban su inconformidades.

Adicionalmente, la administración del presidente Gaviria buscaba la forma de luchar y subsanar el tema que por años ha sido la discusión en el interior del país; el narcotráfico y la guerra. En consecuencia, hizo parte de pactos, consejos y foros, cuyos principios sobre la democracia, defensa de los derechos humanos, terrorismo, y narcotráfico, congeniaban con los sucesos acaecidos en el país.

Por consiguiente, la búsqueda de respaldo y cooperación en diversidad de temas, y en consecuencia con el panorama mundial; donde los organismos multilaterales habían alcanzado una injerencia en cada uno de los Estados miembros. Dichos espacios sirvieron para que el país junto con otros Estados de la región que buscaban mecanismos para combatir las amenazas que tenía el continente, promovieran globalmente las ventajas de su enfrentamiento.

Ahora bien, el tema más trascendental después de la oleada de violencia durante los años ochentas era la seguridad. Por ello, el gobierno de Gaviria hizo toda una estrategia para combatir la inseguridad que el flagelo le había dejado al país. Sin embargo, aunque ya no existían los mismos grupos ilegales; pues, la mayoría había escogido las vías del dialogo y el desarme; muchos otros seguían ejerciendo actividades ilegales, en especial los grupos terroristas financiados por el narcotráfico, continuaban siendo un problema de seguridad para la sociedad.

En consecuencia, Gaviria por medio de la creación de nuevas instituciones como la Consejería Presidencial para la Defensa y Seguridad, pretendía unir a los civiles y militares en pro de una política de seguridad, en contra de la violencia. De acuerdo a Torres del Rio (2010) ésta política planteaba tres propósitos: mantener y garantizar el monopolio de las armas, fortalecer la justicia y ampliar el cubrimiento institucional por parte del Estado a toda la geografía.

Por lo tanto, se instauraron estrategias dirigidas a éstos propósitos; por medio del fortalecimiento de las autoridades locales y regionales junto con el reforzamiento de la coordinación institucional, de igual manera mediante los consejos seccionales de seguridad de alcance regional y municipal. Se buscaba una

solución para el problema de la violencia; principalmente se trabajaba en reducir la impunidad.

Sin embargo, no tuvo mayor éxito puesto que los dos principales grupos armados; Ejército de Liberación Nacional (ELN) y la Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), se mantenían en las armas. Por esto, Gaviria inició una ofensiva permanente, destinando brigadas móviles y poniendo a disposición mecanismos jurídicos. De igual forma, lanzo lo que se denominó la segunda fase de la estrategia, la “seguridad para la gente” partía de una nivelación de los delitos, de igual manera a partir de este punto se planificó un incremento en el pie de fuerza.

Debido a esto, se llevó a cabo una reforma militar, la cual le daba al sector más herramientas e instituciones que le permitieran combatir contra la violencia, narcotráfico y terrorismo. Por lo tanto, el aumento del presupuesto sirvió para elevar las condiciones institucionales y operativas de cada tropa junto con la modernización de los aparatos militares. De igual manera, con el fin de participar en la coordinación y formulación de todo lo relativo a la seguridad y justicia, se crea la Unidad de Justicia y Seguridad en el Departamento Nacional de Planeación. En consecuencia, el gasto en el sector defensa tuvo un significativo aumento con respecto a los años ochenta, la inversión en la adquisición de nuevas armas, helicópteros y buques hizo parte de las ventajas de la reforma.

Sin embargo, el contexto de corrupción, narcotráfico y violencia seguía siendo el mayor problema de seguridad del país. A comienzos de los años noventa los carteles de la droga; el cartel de Medellín liderado por Pablo Escobar y el cartel de Cali, en cabeza de los hermanos Rodríguez Orejuela; hicieron de éstas dos ciudades, campos de guerra; los dos carteles se batallaban constantemente el liderazgo del negocio de la droga. Después de la constante persecución a Escobar, el bloque de búsqueda logra dar con él, dándole de baja en diciembre de

1993. Como consecuencia, el cartel de Cali tomo las riendas del negocio, convirtiéndose en el líder de éste.

Tras los hechos ocurridos al finalizar la administración de Gaviria, comienza un nuevo capítulo donde se ve una vez más la clase política inmiscuida por la corrupción, dineros ilícitos, clientelismo asociado a la crisis de los partidos políticos, que desemboca, nuevamente, en la debilidad institucional y judicial.

En consecuencia, los problemas estructurales y coyunturales del país; el narcotráfico como fenómeno desestabilizador del Estado y la sociedad; pues financiaba campañas electorales; produjo una crisis política que se vivió durante el mandato del presidente Samper.

Tras las elecciones presidenciales en 1994, la campaña de Samper se vio manchada por unos casetes que lo involucraban de manera directa con el Cartel de Cali; los casetes evidenciaban que su candidatura había sido financiada e infiltrada por el cartel, lo cual dejaba una preocupación en la opinión pública y la sociedad.

A partir de ahí, iniciarían una serie de hechos lamentables y vergonzosos para el país; la renuncia de varios políticos que ocuparon puestos durante la administración; como la de su vicepresidente; hizo notable el desconcierto y la desaprobación, que llevo a hacerle juicio no sólo a él, sino a varios sectores de la actividad política que se vieron manchados por dineros ilícitos. Sin embargo, otros hechos serian de gran importancia para el avance en la seguridad del país; la captura de importantes cabecillas de los carteles de la droga como lo fue Miguel Rodríguez Orejuela y Justo Pastor Perafán,

En consecuencia a los continuos hechos de violencia, conflicto armado y el agravamiento de los problemas sociales; se creó un debate tras la delegación por parte parcial del Estado del monopolio de las armas a las Cooperativas de Seguridad Convivir y sobre sus nexos con los grupos paramilitares y delincuencia

común; el debate no duro mucho pues a mediados de la administración del gobierno Samper se eliminaron las Convivir.

Entretanto, en medio del juicio en contra suya, el presidente Samper desarrollo varios cambios: propuso una reforma constitucional, en la cual incluía un congreso unicameral; creó el “zar” antisequestro y las zonas especiales de orden público, aumento el presupuesto militar, de igual manera logró mantener el apoyo de los grupos económicos más importantes.

De igual manera, durante su periodo, se impulso una política social sin precedentes; los estratos bajos fueron los más beneficiados con el desarrollo de su política; plantea Torres del Rio (2010), que durante su administración la inversión social con respecto al PIB, pasó del 7% al 15%, evidenciándose sobre todo en el sector de la salud, aumentando su cobertura subsidiada, de igual forma, mejores condiciones para el acceso al agua potable, entre otras mejoras, que permitió el desvío de su destitución.

Posteriormente, tras la elecciones de 1998, tejidas bajo las promesas de cambio social, junto con la política de una solución negociada al conflicto armado; Andrés Pastrana es elegido como presidente; tras el crecimiento de la guerrilla y el impacto que dejaron durante la administración inmediatamente anterior. Pastrana tenía un gran reto; la consolidación de la paz.

En consecuencia, el acuerdo bilateral constituido entre Colombia y Estados Unidos en 1999; tenía en principio objetivos específicos basados principalmente en la política estadounidense contra el narcotráfico, centrada en la persecución a las mafias y en la fumigación de los cultivos ilícitos. Según plantea, Leal (2006):

(...) el lanzamiento del Plan Colombia supuso la firma de un compromiso de cooperación en materia de seguridad con EE.UU, que garantizó la transferencia de un volumen sustancial de equipo, así como la apertura de programas de entrenamiento para la fuerza pública.(p.333)

Debido a esto, las reformas militares no se hicieron esperar, el diseño y la reestructuración de las fuerzas se hizo necesaria para la implantación del Plan Colombia. Plantea Torres del Rio (2010) que la transformación militar comprendió tres aspectos complementarios: cambios institucionales, nuevas tecnologías y una nueva doctrina (p.443).

Por otro lado la necesidad de consolidación de paz, llevo al presidente Pastrana a instaurar conversaciones de paz, por lo que, desmilitarizo la zona de San Vicente del Caguan, estableciendo mesas de diálogo entre las dos partes. De manera que una vez más se creó en la sociedad una esperanza de paz.

Sin embargo, las negociaciones no tuvieron mayor éxito puesto que, las FARC no habían dejado las acciones armadas, y no estaban dispuestas hacerlo. Por lo tanto éstas fallidas negociaciones dejaron ver una vez más la debilidad estatal y la ausencia de un liderazgo nacional fuerte, que conllevaron al aumento de sus filas y aprovecharon la zona despejada para rearmarse.

De manera que, el concepto de la seguridad durante la década de los 90's se hizo esencial para la elaboración de políticas sociales, sobre todo en el sector rural el cual fue el mayor a afectado, pues el escenario del conflicto armado colombiano después de la disolución en gran parte de los carteles de la droga, paso de ser urbano a situarse en lo rural, desplazando miles de campesinos y afectando de manera significativa y nefasta el sector agrario.

Conclusiones

A través de cada uno de los capítulos se pudo analizar como las estructuras e instituciones consolidadas hacen parte de un proceso de construcción de Estado, de igual manera como éstas participan del desarrollo de éste que lleva a la consolidación del Estado como tal. Es importante mencionar que las instituciones funcionan en conjunto, por lo tanto todas hacen parte del proceso, y si alguna parte falla, el flujo continuo de este se romperá, creando complicaciones y alteraciones a éste, obstruyendo alcanzar el fin de éste.

De tal manera que, durante el primer capítulo se determinan algunos procesos básicos que debe tener un proceso de construcción de un Estado legítimo. Conceptos como cultura política, nación, el papel del Estado en la economía; interacciones enmarcadas dentro un marco legal basado en garantizar la legalidad de cada una de las medidas que se tome en busca de la satisfacción de las necesidades de los individuos, permitiendo que se dé continuidad al flujo correspondiente para la eficacia del proceso. De igual manera, se determino la importancia de la legitimidad del monopolio de la fuerza por parte del Estado, a través de las postulaciones que hace el sociólogo Max Weber; para éste, el monopolio de la fuerza va de la mano con el concepto de soberanía y potestad política,

En consecuencia, el segundo capítulo contextualizo cada uno de éstos procesos en el desarrollo del flujo correspondiente que da respuesta a las demandas sociales y políticas; de igual forma se tocaron nuevos conceptos que hacen parte de los procesos actuales como la importancia que tiene la limitación por parte del Estado para plantear soluciones dentro de las capacidades y alcance de éste. De igual manera, se determino la importancia de la participación ciudadana en los procesos políticos, en la toma decisiones, en especial es su cooperación junto con las instituciones hacen parte de éste.

Finalmente, por medio de un breve resumen de los hechos que marcaron los años 90, se determinaron los procesos que participaron en la construcción del Estado colombiano durante ese periodo; debido a esto se pudo analizar que durante la década de los noventa fue un periodo donde se consolidaron las instituciones estatales, la búsqueda constante e incisiva de la seguridad y el monopolio de la fuerza, y la lucha continua por combatir el terrorismo y la violencia generalizada que vivía el país en ese entonces, llevo a la movilización social que obligo al Estado y al sector político a crear mecanismos y herramientas nuevas que permitieran combatir el contexto nefasto en el que se vivía.

Por lo tanto la Constitución de 1991, fue la mayor herramienta y la base de las reformas que vendrían detrás, permitiendo que se gestara un nuevo marco legal que garantizo las futuras políticas de tipo social y político. La instauración de la Constitución fue para la sociedad el camino hacia el cambio, hacia el progreso; la creación de nuevos mecanismos que protegen los derechos fundamentales como la tutela, la creación de nuevos derechos civiles y políticos, el reconocimiento de los derechos humanos, de acuerdo al momento histórico del mundo en ese momento: como la libre asociación, el derecho a la huelga a expresarse, fue el punto de partida para la consolidación del Estado, una constitución renovadora, transformadora que reforzó los derechos del individuo.

En consecuencia, esto permitió que se crearan nuevas instituciones que demandaba la sociedad, entidades especializadas en temas que hasta ese entonces no había sido posible su instauración; como lo fue la Defensoría del Pueblo y la Corte Suprema; instituciones creadas para garantizar los derechos del individuo.

De igual manera, la instauración de reformas y estrategias que buscaban consolidar el sector militar; durante la década de los noventa el sector defensa tuvo varios aumentos en el presupuesto, esto con el fin de luchar contra el terrorismo y el narcotráfico, lo cual permitió que Colombia modernizara su estructura militar permitiéndole detentar los medios para combatir la violencia.

Por otro lado, durante las administraciones del presidente Gaviria y Samper se erigieron reformas de tipo económico y social, que permitieron que el país avanzara de modo lento pero seguro si se compara con algunos países centroamericanos, y a pesar de su conflicto armado. Durante la administración del presidente Samper, se evidencio un aumento en el presupuesto social; la asignación de subsidios, la instauración de la política de salud para todos; fueron medidas que le devolvieron a la sociedad la confianza en el Estado.

De igual manera la captura de importantes cabecillas del narcotráfico y la muerte de Escobar por parte de la Policía Nacional, le devolvió a la sociedad la confianza en las instituciones del Estado, y a la eficacia de éstas. Sobre todo, la legitimidad del monopolio de la fuerza, pues si bien durante esa década se aumento el número de insurgentes, también se fortalecieron las fuerzas militares y las estrategias para luchar contra éstos.

Finalmente, la década de los noventa fue el inicio de un cambio político y social por medio de estrategias, reformas, leyes, y garantías que le permitieron al Estado consolidar sus instituciones, creo las garantías que posibilito la creación de políticas eficientes que le devolvieron a la sociedad la confianza. Durante la década, se intensificaron la búsqueda de herramientas que le permitieran al Estado la consolidación de la paz, por medio de la recuperación del monopolio de la fuerza. Por lo tanto, durante este periodo se dieron procesos que construyeron Estado, por medio de la consolidación de las instituciones.

Bibliografía

- Alonso, G. V. (2007). *Capacidades Estatales, Instituciones y Política Social* . Buenos Aires (Argentina): Prometeo .
- Alzate, S. A. (2010). Las políticas públicas en Colombia; insuficiencias y desafíos . *DIME*.
- Amaya, A. C., & Hernández, C. G. (2009). *Genesis y transformaciones del estado nación en Colombia* . Editorial Universidad del Rosario, Escuela de Ciencias Humanas.
- Anderson, B. (1993). *Comunidades Imaginadas, Reflexiones sobre el origen y la difusión del nacionalismo*. México : Fondo de Cultura Económica .
- Ardila, N. R. (2007). *La Economía Colombiana; del modelo de protección al modelo de apertura*. Medellín: Universidad de Medellín.
- Aron, R. (1963). *Paz y Guerra, entre las naciones*. Madrid: Copyright- Revista de Occidente , S.A.
- Bealey, F. W. (2003). *Diccionario de ciencia política* . Ediciones Istmo, S.A.: Madrid .
- Bobbio, N. (2000). *Estado, Gobierno y Sociedad* . México : Fondo de Cultura Económica .
- Bobbio, N. (2001). *El futuro de la democracia* . México: Fondo de Cultura Económica.
- Bobbio, N. (2009). *Teoría General de la Política* . Madrid : Editorial Trotta S.A.
- Bobbio, N., Mateucci, N., & Pasquino, G. (1991). *Diccionario de política*. México: siglo xxi editores, s.a. de c.v.
- Botella, J. (2007). Teoría del Estado. En *Teoría del Estado* (pág. 27). Barcelona: naxos.
- Carre de Malberg, R. (1948). *Teoría general del Estado*. México: Fondo de Cultura Económica.
- Cohen, E. (2005). *Gestión social: cómo lograr eficiencia e impacto en las políticas sociales* . México: Cepal, Siglo Veintiuno Editores.

- Colomer, J. (2001). *Instituciones políticas* . Barcelona : Editorial Ariel
- Crespo, P. d. (1997). *Cultura política: enfoque teóricos y análisis empíricos / Joan Botella Corral* . Valencia : Tirant lo Blanch.
- Chabod, F. (1987). *La idea de nación* . México: Fondo de Cultura Económica, S.A.
- Duverger, M. (1992). *Instituciones políticas y derecho constitucional*. México: Ariel
- Duverger, M. (1957). *Los Partidos Politicos*. México: Fondo de Cultura Económica
- Fernández, V. R. (2001). *Estrategias de desarrollo y transformación estatal*. Argentina: Universidad Nacional de Litoral.
- Fukuyama, F. (2004). *La construcción del estado: hacia un nuevo orden mundial en el siglo XXI*. Barcelona : Ediciones B, Grupo Zeta.
- Gavia, A. F. (2007). Ciudadanos y derechos humanos . En G. E. Emmerich, *Tratado de Ciencia Política*. México: Anthropos .
- Gavia, G. E. (2007). Democracia vs. autoritarismo. En G. E. Emmerich, *Tratado de ciencia política* . México: Anthropos.
- Gonzalez, F., Bolívar, I., & Vázquez, T. (2002). Violencia Política en Colombia: de la nación fragmentada a la construcción del Estado. Bogotá , Colombia: Cinep, Centro de investigación y educación popular.
- Haro, M. L. (2007). Partidos Politicos, Sistemas Electorales y Sistemas de Partidos . En G. E. Olguin, *Tratado de Ciencia Política* . Barcelona : Anthropos Editorial Rubi .
- Inglehart, R. (1991). El cambio cultural en las sociedades avanzadas. En *El cambio cultural en las sociedades avanzadas*. Madrid: CIS.
- Konrad Adenauer Stiftung. (2011). 20 años de la Constitución Colombiana ; logros retrocesos y agenda pendiente. En S. Jost (Ed.). Colombia: Fundación Konrad Adenauer- KAS.
- Kelsen, H. (1995). *Teoría General del Derecho y del Estado*. México: Universidad Nacional Autónoma de México.

- Leal, F. (2006). *En la encrucijada: Colombia en el siglo XXI*. Bogotá: Grupo Editorial Norma, CEP- Banco de la República, Biblioteca Luis Ángel Arango.
- Moreno, D. Y. (1995-1996). *Derecho contitucional colombiano*. Santafé de Bogotá : Escuela Superior de Administración Pública -ESAP.
- Parsons, W. (2007). *Políticas públicas, una introducción a la teoría y la práctica del análisis de políticas públicas*. México: Flacso.
- Ramírez, J. (2008). *Legitimidad del Estado, Legalidad y Seguridad Democratica, análisis a la seguridad, como elemento del Estado Nación y su reformulación en Colombia* . Grupo de Investigación Synergia - Universidad Surcolombiana.
- Sartori, G. (1994). *Partidos y sistemas de partidos* . Madrid : Alianza Universidad .
- Sen, A. (2006). *El valor de la democracia* . España : El Viejo Topo.
- Smith, A. (1981). *Investigacion sobre la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones*. México: Fondo de Cultura Económica.
- Spielman, J. E. (2007). Una aproximación al análisis de la conceptualización de la seguridad y defensa nacional entre el Perú y Chile. En M. A. Rouxel, *Nuestros Vecinos* (pág. 568). Chile: RIL .
- Torres del Río, C. (2010). *Colombia Siglo XX: desde la guerra de los Mil días hasta la elección de Alvaro Uribe*. Bogotá: Grupo Editorial Norma.
- Ware, A. (2004). *Partidos, Partidos Politicos y Sistemas de Partidos*. Madrid: Ediciones Istmo, S.A.
- Weber, M. (1963). *Economia y Sociedad*. México : Fondo de Cultura Economica . vol.I,II,III y IV